

Señores.

JUZGADO OCTAVO “08” ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

ASUNTO:	CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
REFERENCIA:	MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTES:	ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ Y OTROS
DEMANDADOS:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
LLAMADO EN GTÍA:	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y OTROS
RADICACIÓN:	76001-33-33-008-2022-00010-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de Apoderado General de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, sociedad debidamente constituida, identificada con NIT 860.026.518-6, sometida a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio principal en la Calle 72 No. 10 – 51 Piso 7, de la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el doctor Jaime Chaves López, identificado con cedula de ciudadanía No 79.693.817, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio que se anexa, en el que figura inscrito el respectivo poder general a mi otorgado mediante escritura pública No 1599 de la Notaría 28 de Bogotá del 24 de noviembre de 2016, encontrándome dentro del término legal comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** propuesta por el señor Anderson Ríos González y otros en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali. En segundo lugar a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por este último a mi prohijada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hace a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho tanto en la demanda como en el llamamiento en garantía, en los siguientes términos:

CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD

Teniendo en consideración que la notificación electrónica del auto interlocutorio No. 443 del 28 de julio de 2022 se efectuó el 01 de septiembre de 2022, se concluye que este escrito es presentado dentro del tiempo previsto para tal efecto.

CAPÍTULO II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

FRENTE AL CAPÍTULO “I. HECHOS”

Acápite denominado como “antecedentes”

Frente al hecho denominado “1”: Es cierto, así se desprende de la prueba documental aportada, esto es, el certificado de registro civil de nacimiento No. 3430907 – NIUP 910420-80042.

Frente al hecho denominado “2”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Frente al hecho denominado “2.2”: Dado que el hecho contiene varias afirmaciones se procederá a contestarlas de manera independiente de la siguiente forma:

- Respecto la afirmación que no es posible acreditar los ingresos del señor Anderson Ríos González, es una situación que no le consta a mi representada. Esta afirmación deberá tenerse como confesión del apoderado judicial, en el sentido que no obra prueba de los ingresos del mencionado señor.
- Ahora, no es cierto que conforme los lineamientos de la jurisprudencia vigente, sea dable presumir que el señor Anderson Ríos González devengaba un salario mínimo legal mensual vigente. Para corroborar esto, es suficiente con tener presente el fallo del Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, en Sentencia de Unificación con fecha del 18 de julio de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera (exp. 44572), en la cual se preció que **es preciso eliminar la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo**, en tanto contraría uno de los elementos fundamentales del daño, esto es, la certeza.

Frente al hecho denominado “3”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Frente al hecho denominado “3.1”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Acápite denominado como “caso concreto”

Frente al hecho denominado “4”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Frente al hecho denominado “5”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, es importante señalar que, en las pruebas documentales aportadas en la demanda, específicamente aquellas donde se evidencia la respuesta del cuerpo de Bomberos de Cali, se observa lo siguiente:

Santiago de Cali, 9 de noviembre de 2021

CEXCO-297-2021

Doctor

EDINSON TOBAR VALLEJO

“dejuridicasas@gmail.com”

REFERENCIA:

SOLICITUD DE CONCEPTOS E INFORMACIÓN CAIDA PUENTE PEATONAL.

Atento saludo:

Se procede de conformidad a resolver el derecho de petición de la referencia en los siguientes términos:

1.- Nuestras unidades al acudir al llamado de emergencia, el 12 de enero de 2019, ocurrida en la **carrera 28E 1 calle 72 Y**, barrio el poblado, no atendieron a su poderdante señor **JUAN DANIEL AMBUILA CARREÑO**, por lo tanto, no se tiene información alguna, salvo la que suministró en su petición.

2.- La caída del puente es un hecho notorio, sin que estemos en capacidad de conceptuar sobre las causas que originaron su colapso.

Oficio CEXCO-297-2021, firmado por el Comandante Capitán Ing. Roberto Duque Mora.

Se resalta: “*Nuestras unidades al acudir al llamado de emergencia, del 12 de enero de 2019, ocurrida en la (...) no atendieron a su poderdante señor JUAN DANIEL AMBULIA CARREÑO (...)*”

Adicionalmente, también se presentó la siguiente prueba documental:

Santiago de Cali, 30 de agosto de 2021

CEXCO-192-2021

Doctor

EDINSON TOBAR VALLEJO

“dejuridicasas@gmail.com”

REFERENCIA:

SOLICITUD DE CONCEPTOS E INFORMACIÓN CAIDA PUENTE PEATONAL.

Atento saludo:

Se procede de conformidad a resolver el derecho de petición de la referencia en los siguientes términos:

1.- Nuestras unidades al acudir al llamado de emergencia, el 12 de enero de 2019, ocurrida en la **carrera 28E 1 calle 72 Y**, barrio el poblado, no atendieron a su poderdante señor **JUAN DANIEL AMBUILA CARREÑO**, por lo tanto, no se tiene información alguna, salvo la que suministró en su petición.

Oficio CEXCO-192-2021, firmado por el Comandante Capitán Ing. Roberto Duque Mora.

Se resalta: “Nuestras unidades al acudir al llamado de emergencia, del 12 de enero de 2019, ocurrida en la (...) no atendieron a su poderdante señor JUAN DANIEL AMBULIA CARREÑO (...)”

Así las cosas, no existe una correspondencia fáctica entre lo narrado en el hecho y lo que se consta con las respuestas dadas por Benemérito Cuerpo de Bomberos y Voluntarios de Cali, pues estos hicieron referencia a una fecha distinta a la esgrimida en la demanda.

Frente al hecho denominado “6”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Frente al hecho denominado “6.1”: El hecho presenta un error de cohesión, pues la afirmación, “de acuerdo con la historia clínica de los demandados, estos sufrieron las siguientes fracturas”.

Así las cosas, el Distrito Especial de Santiago de Cali es un ente territorial con personería jurídica y al no ser una persona natural no es sujeto de recibir atención médica alguna.

Superada esta contradicción lógica, de entender que el hecho hace referencia a la historia clínica de los demandantes, debemos señalar en primera medida que es una afirmación que no le consta a mi representada, pues no es una situación fáctica propia de ella.

Ahora bien, es importante señalar que la descripción citada **no hace referencia a fractura alguna.**

Frente al hecho denominado “7”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Frente al hecho denominado “8”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Frente al hecho denominado “9”: No le consta a mi procurada lo relatado en este hecho, por cuanto no es una situación fáctica propia de la aseguradora. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Frente al hecho denominado “10”: No es un hecho, es un aspecto relativo al derecho de postulación que ostenta la apoderada judicial de los demandantes.

I. FRENTE AL CAPÍTULO “PRETENSIONES” DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad. En las pretensiones de la demanda es notorio el deseo desproporcionado del extremo actor por lucrarse, debido a que no logra, siquiera de forma sumaria, demostrar los elementos esenciales para que se configure la eventual responsabilidad en cabeza de la parte pasiva.

Frente a la pretensión “primera”: Respetuosamente manifiesto al despacho que, aunque las pretensiones de la demanda NO están dirigidas en contra de mi representada, me opongo a que se declare al Distrito Especial de Santiago de Cali como responsable, administrativa y extracontractualmente de los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados a los demandantes.

Lo anterior, como quiera que no hay ningún fundamento fáctico, jurídico ni probatorio que establezca que por parte del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** se desarrolló alguna conducta negligente u omisiva que hubiese sido la desencadenante de los hechos reprochados.

Por el contrario, no está demostrado ni el evento que se alega como genitor del daño, ni tampoco el presunto daño antijurídico que pretende ser resarcido en sus diferentes tipologías o modalidades.

Frente a la pretensión “segunda”: Respetuosamente manifiesto al despacho que, aunque las pretensiones de la demanda NO están dirigidas en contra de mi representada, me opongo a que el Distrito Especial de Santiago de Cali “reconozca los perjuicios materiales y morales”, como quiera que no existe un fundamento fáctico, jurídico ni probatorio que permita enervar la responsabilidad del ente territorial, en consecuencia, no hay nada “que reconocer”.

Frente a la pretensión “tercera”: Respetuosamente manifiesto al despacho que, aunque las pretensiones de la demanda NO están dirigidas en contra de mi representada, me opongo a la pretensión se erige como una consecuencia de las anteriores, esta siendo condenatoria o resarcitoria, no tiene vocación de prosperidad por las razones anteriormente expuestas, que se sintetizan en la ausencia de prueba del evento dañino y ausencia del elemento daño antijurídico que pretende ser resarcido.

Aunado a ello, la solicitud de pago de los perjuicios morales se encuentra desbordada, máxime que no existe prueba del daño alegado por el extremo demandante.

Frente a la pretensión “cuarta”: Respetuosamente manifiesto al despacho que, aunque las pretensiones de la demanda NO están dirigidas en contra de mi representada, me opongo a la pretensión se erige como una consecuencia de las anteriores, de índole declaratoria, ésta siendo condenatoria o resarcitoria, no tiene vocación de prosperidad por las razones anteriormente expuestas, que se sintetizan en ausencia de prueba del evento dañino y ausencia del elemento daño antijurídico que pretende ser resarcido.

Así las cosas, la solicitud de daño a la salud por valor de CIEN (100) SMLMV se encuentra desbordada, máxima que no existe prueba del daño alegado por el extremo demandante. Adicionalmente, no se encuentra atemperada con los baremos establecidos en el documento final del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Frente a la pretensión “quinta”: De manera genérica se solicita el pago de los perjuicios materiales causados a título de lucro cesante (consolidado y futuro) y que esta suma será ajustada según el dictamen de pérdida de capacidad laboral que eventualmente se practique.

Precisado esto, respetuosamente manifiesto al despacho que, aunque las pretensiones de la demanda NO están dirigidas en contra de mi representada, me opongo a la misma, pues parte de dos (02) supuestos que no se concretan.

El primero de ellos, es la declaratoria de responsabilidad del demandado, la cual, como se dijo, es inexistente; y, en segundo lugar, un eventual dictamen de pérdida de capacidad laboral, que se realizará a la presunta víctima directa.

En este punto es menester señalar que como fue confesado en el hecho “2.2.” no se encuentran acreditados los ingresos del señor Ríos González, así pues, tampoco se encuentra demostrado que este realizara alguna actividad lucrativa, por lo que no es viable presumir ningún ingreso al respecto.

De otro lado, es importante señalar que en el acápite “iv. *Estimación razonada de la cuantía*” se señaló el lucro cesante consolidado en la suma de \$33.755.818 y como lucro cesante futuro la suma de \$238.703.230. Finalmente, que debía restarse el 25 %, que se presume se invertía en gastos propios, entonces la suma es de \$179.027.422.

Respecto a este punto, se realiza oposición, pues no existe claridad forma alguna de presumir el valor devengado por el señor Ríos González, pues a tono con la decisión del Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, en Sentencia de Unificación con fecha del 18 de julio de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera (exp. 44572), se acotó que en lo que atañe a la liquidación del lucro cesante futuro, **es preciso eliminar la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo**, en tanto contraría uno de los elementos fundamentales del daño, esto es, la certeza.

Lo anterior, en tanto que, para dicha corporación, se puede incurrir, al no dudar de su existencia, en el desatino de indemnizar un perjuicio inexistente, incierto o eventual.

En consecuencia, a falta de prueba suficiente que permita demostrar la actividad laboral productiva del señor RÍOS GONZÁLEZ se traduce que no puede generarse un pago a cargo del demandado sobre supuestos fácticos que no han sido corroborados.

NOTA: Dentro de las pretensiones no obra una solicitud expresa de reconocimiento a los “daños a los derechos constitucional y convencionalmente protegidos”; no obstante, en el acápite de estimación razonada de la cuantía, se argumentó lo siguiente:

“C. DAÑO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS.

*A causa de los hechos el señor **ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ**, se ha visto afectado considerablemente su vida, dado que producto de la afección padecida ya no volvió a relacionarse con su grupo familiar, amigos y entorno, de la manera como lo hacían antes. Por lo expuesto debe reconocerse al señor **ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ** el equivalente a 100 S.M.M.L.V. por concepto de daño a la vida en relación, a cada uno.”*

OPOSICIÓN: Es claro entonces que el extremo actor confunde el “DAÑO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS”, con el concepto de daño a la vida en relación. Además, que previamente solicitó como daño a la salud un valor al señor RÍOS GONZÁLEZ.

Superado esto, también se presenta oposición, en el sentido que no se encuentran acreditados ninguno de los elementos constitutivos de responsabilidad estatal. Tampoco se encuentra prueba sumaria del daño antijurídico que pretende ser resarcido.

Finalmente, debe señalarse que, si bien no obra una pretensión puntual de reconocimiento a esta tipología de perjuicio, la simple mención en el acápite respectivo implica una oposición de esta parte, para lo cual debe sintetizarse todo lo discurrido y aunado a esto, señalar que para resarcir esta tipología, se privilegian medidas no pecuniarias.

CAPÍTULO III - FUNDAMENTOS DE DERECHO

Régimen de responsabilidad aplicable

Como punto de partida para identificar el régimen aplicable debe tenerse en cuenta la atribución que la parte demandante realizó. Puede extraerse de la demanda, se pretendió atribuir responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, en atención a lo siguiente:

“En ese orden de ideas, se encuentra acreditado la existencia de un hecho dañoso; las lesiones de mis poderdantes, producidas por el desplome de un puente peatonal en la ciudad de Cali, daño, que el señor ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ no estaba en el deber jurídico de soportarlo, y el cual fue ocasionado por la omisión del Municipio de Cali al no realizar las reparaciones y mantenimiento pertinentes que se debía realizar el Municipio de Cali al puente.

En este caso, la conducta omisiva del Municipio de Cali, consistente en la falta de mantenimiento fue la determinante en la producción del hecho dañoso, pues el accidente del señor ANDERSON RÍOS GONZÁLEZ se debió al mal estado del puente que colapsó, por falta de mantenimiento, actividades que debía ser realizada por el municipio, de modo que se encuentra acreditado el nexo de causalidad entre la omisión de la Administración y el daño sufrido por los demandantes y no obra prueba que demuestre la configuración de una causa extraña que exonere de responsabilidad al Municipio de Cali. Razón por la cual la entidad demandada resulta administrativa y patrimonialmente

responsable por los daños ocasionados a la parte actora.” –Subrayado y negrilla fuera del original.

La jurisprudencia que ha analizado estos casos concluye que el proceso debe ser tratado bajo un régimen subjetivo de responsabilidad, pues los daños reclamados parten de los presupuestos propios de un régimen de este tipo.

Por esto, debe advertirse que el régimen aplicable es el de falla probada del servicio y que corresponde a la parte demandante probar (i) el daño antijurídico y (ii) la imputación fáctica y jurídica.

Partiendo de este criterio, y según lo sostenido por el artículo 167 del Código General del Proceso, *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*, es la parte demandante quien tiene la carga de acreditar los elementos estructurales de la responsabilidad que pretende atribuir al Distrito Especial de Santiago de Cali, **carga que no ha cumplido hasta esta etapa.**

Además, al momento de valorar los elementos probatorios disponibles en el proceso para acreditar la falla del servicio, debe realizarse también un análisis causal para que esa supuesta falla haya determinado el daño. No basta solamente acreditar una presunta omisión administrativa en el cumplimiento de sus deberes, sino que el juicio de responsabilidad implica también la prueba de los demás requisitos estructurales, por tanto, establecer el régimen de responsabilidad no supone por sí mismo la atribución de responsabilidad. Al respecto se ha precisado:

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”¹.

Así pues, el análisis a realizarse en la sentencia debe estar encaminado en determinar que para que se configurara la responsabilidad deben confluir tres elementos, a saber:

1. La existencia de un daño antijurídico que configure la lesión o perturbación de un bien jurídicamente protegido,
2. La existencia de un hecho que configure una falla del servicio de la entidad, sea por retardo, irregularidad, ineficacia, omisión o ausencia del mismo y,
3. El nexo causal entre el hecho dañoso y la falla o la falta del servicio deprecada.

CAPÍTULO IV – EXCEPCIONES PREVIAS

Se presenta la excepción previa contemplada en el numeral 6 del artículo 100 del Código General del Proceso, que señala lo siguiente:

¹ Sección Tercera, sentencia de septiembre 11 de 1997, expediente: 11764. Posición reiterada en sentencias de 25 de abril de 2012, expediente: 22572 y 12 de agosto de 2013, expediente: 27475.

ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS. *Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:*

(...)

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

La misma se fundamenta en el hecho que no está demostrada la calidad de <hermana> de la demandante, Lina Fernanda Ríos González, ni de <hermano> del señor Jefersson Ríos González pues no se aportó el registro civil de nacimiento de estos. En su lugar, sólo se aportó el del señor Anderson Ríos González y el de Ángela María González Villegas.

Así las cosas, no está demostrada la calidad en que actúan los demandantes mencionados, lo que daría lugar a la configuración de la excepción previa en cita.

CAPÍTULO V - EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA

En el presente acápite se presentarán los fundamentos de hecho y de derecho que en general, sustentan la oposición a las pretensiones de la demanda y que en particular dan cuenta de que la demandante no ha probado, como es su deber, la existencia de todos los supuestos normativos de la presunta responsabilidad patrimonial que pretende endilgarse a la parte demandada en este litigio.

Se sustenta la oposición a las pretensiones invocadas por el extremo activo de este litigio de conformidad con las siguientes excepciones:

1. LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS POR QUIEN EFECTÚA EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MI PROCURADA.

Coadyuvo las excepciones planteadas por la apoderada judicial del Distrito Especial de Santiago de Cali, sólo en cuanto las mismas no perjudiquen los intereses de mi procurada, y en ese sentido y tenor las que expongo a continuación:

2. LA PARTE ACTORA NO ACREDITA LA OCURRENCIA DEL EVENTO DAÑINO

De las pruebas que obran en el plenario, especialmente aquellas aportadas por la parte demandante, señalan o apuntan a que la que los hechos no ocurrieron como fueron reseñados por la parte demandante, careciendo entonces de la prueba de la ocurrencia del evento dañino.

Dentro de la narración de la demanda, se señaló que el 01 de diciembre el señor Ríos González, iba cruzando el puente peatonal de la carrera 28E1 con calle 72Y del barrio Poblado II de la ciudad de Santiago de Cali, cuando la estructura colapsó y generó que las personas que por allí transitaban cayeran desde una altura de 3 metros aproximadamente. Adicionalmente, que fruto de dicho evento catalogado como dañino, se generaron unas afectaciones de orden corporal. No obstante, ninguna de las pruebas aportadas, permite inferir lo que fue señalado en la demanda.

Así las cosas, al revisar el documento <resumen de epicrisis> de la Clínica Colombia, es totalmente válido concluir que el señor Anderson Ríos González no fue honesto, al respecto, los motivos de consulta y de enfermedad actual señalan que el paciente presentó accidente de tránsito:

FECHA	MOTIVOS DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL
2019-12-01	<div>04:40 jsbayona - JHOAN SEBASTIAN BAYONA GOMEZ</div> <div>MOTIVO DE CONSULTA : " me accidente"</div> <div>ENFERMEDAD ACTUAL : Paciente masculino de 28 años de edad que ingresa en compañía de paramédicos por presentar accidente de tránsito, que según relato de aph y paciente, este sufre traumatismo craneoencefalico y reja costal, la cual no genera limitación en la bipedestacion, ni limitación en los arcos de movimiento, asociado a marcado dolor, en el momento del incidente niega algun otro tipo de trauma, niega perdida o alteracion del estado de conciencia, niega emesis niega algun otro sintoma asociado.</div> <div>ANT: Niega</div>

Fecha de ingreso: 01/12/2019

Se resalta: "Paciente masculino de 28 años de edad que ingresa en compañía de paramédicos por presentar accidente de tránsito, que según relato de aph y paciente (...)"

Ahora, en el motivo de salida y recomendaciones, se señaló lo siguiente:

MOTIVO DE SALIDA Y RECOMENDACIONES		
2019-12-01 08:08	PROFESIONAL: anescobar - ANDREA VICTORIA ESCOBAR	ESPECIALIDAD: MEDICO GENERAL
NOTA ACLARATORIA		
SE REINTERROGA PACIENTE QUIEN REFIERE QUE SUS LESIONES NO SON SECUNDARIAS A ACCIDENTE DE TRANSITO, SI NO QUE CORRESPONDE A CAIDA DE UN PUENTE PEATONAL, MENCIONA QUE LOS PARAMEDICOS LE INDICARON QUE MENCIONARA QUE ESTO HABIA SIDO ACCIDENTE DE TRANSITO PARA QUE LO ATENDIERAN RAPIDO, POR ESTA RAZON SE INDICA A FACTURACION CAMBIO DE RAZON		
2019-12-01 08:19	PROFESIONAL: anescobar - ANDREA VICTORIA ESCOBAR	ESPECIALIDAD: MEDICO GENERAL
SEALICACION DE PACIENTE		

Se resalta: "Se interroga a paciente quien refiere que sus lesiones no son secundarias a accidente de tránsito si no que corresponde a caída de un puente peatonal, menciona que los paramédicos le indicaron que mencionara que esto había sido accidente de tránsito para que lo atendieran rápido (...)"

De modo preliminar es necesario acotar que cuando el señor Ríos Gonzáles fue atendido rindió una versión de los hechos y de manera posterior aclaró que la primera versión no era la adecuada, sino que por obtener un apremio había mentido en su declaración inicial. Esto, sin lugar a duda lleva a cuestionarnos de lo realmente acontecido, dejando un serio matiz de duda al respecto.

Sumado a esto, es importante señalar que, en las pruebas documentales aportadas en la demanda, específicamente aquellas donde se evidencia la respuesta del cuerpo de Bomberos de Cali, se observa lo siguiente:

Santiago de Cali, 9 de noviembre de 2021

CEXCO-297-2021

Doctor
EDINSON TOBAR VALLEJO
"dejuridicasas@gmail.com"

REFERENCIA: SOLICITUD DE CONCEPTOS E INFORMACIÓN CAIDA PUENTE PEATONAL.

Atento saludo:

Se procede de conformidad a resolver el derecho de petición de la referencia en los siguientes términos:

1.- Nuestras unidades al acudir al llamado de emergencia, el 12 de enero de 2019, ocurrida en la **carrera 28E 1 calle 72 Y**, barrio el poblado, no atendieron a su poderdante señor **JUAN DANIEL AMBUILA CARREÑO**, por lo tanto, no se tiene información alguna, salvo la que suministró en su petición.

2.- La caída del puente es un hecho notorio, sin que estemos en capacidad de conceptuar sobre las causas que originaron su colapso.

Oficio CEXCO-297-2021, firmado por el Comandante Capitán Ing. Roberto Duque Mora.

Se resalta: "*Nuestras unidades al acudir al llamado de emergencia, del 12 de enero de 2019, ocurrida en la (...) no atendieron a su poderdante señor JUAN DANIEL AMBULIA CARREÑO (...)*"

Adicionalmente, también se presentó la siguiente prueba documental:

Santiago de Cali, 30 de agosto de 2021

CEXCO-192-2021

Doctor
EDINSON TOBAR VALLEJO
"dejuridicasas@gmail.com"

REFERENCIA: SOLICITUD DE CONCEPTOS E INFORMACIÓN CAIDA PUENTE PEATONAL.

Atento saludo:

Se procede de conformidad a resolver el derecho de petición de la referencia en los siguientes términos:

1.- Nuestras unidades al acudir al llamado de emergencia, el 12 de enero de 2019, ocurrida en la **carrera 28E 1 calle 72 Y**, barrio el poblado, no atendieron a su poderdante señor **JUAN DANIEL AMBUILA CARREÑO**, por lo tanto, no se tiene información alguna, salvo la que suministró en su petición.

Oficio CEXCO-192-2021, firmado por el Comandante Capitán Ing. Roberto Duque Mora.

Se resalta: "*Nuestras unidades al acudir al llamado de emergencia, del 12 de enero de 2019, ocurrida en la (...) no atendieron a su poderdante señor JUAN DANIEL AMBULIA CARREÑO (...)*"

A modo de síntesis, el Cuerpo de Bomberos no atendió un evento de caída de puente ocurrido el 01 de diciembre de 2019, lo que de nuevo, lleva a cuestionarnos sobre la ocurrencia de los hechos, interpretado de otra forma, es claro que, el extremo actor no aporta ningún elemento que permita inferir la existencia del evento que se reclama como dañino. Sumado a esto, también es claro que el cuerpo de bomberos identificó a otra persona, el señor AMBUILA CARREÑO, en la mencionada respuesta, y no al señor Ríos González.

Para dar sustento a esta argumentación, debemos señalar el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, que dicta:

*“**ARTICULO 90.** El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
(...)”*

A su turno, el artículo 140 del C.P.A.C.A., prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. *En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.*

*De conformidad con el inciso anterior, **el Estado responderá**, entre otras, **cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública** o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
(...)”*

A tono con las anteriores citas, constitucional y normativa, es claro que para que proceda una declaratoria de responsabilidad es necesario que exista un daño antijurídico que sea imputable a título de acción u omisión; no obstante, en el presente caso no existe prueba, sumaria ni siquiera, que permita señalar que existió un fenómeno físico de caída de puente, producido por una omisión a cargo del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Así, ante la ausencia de prueba del evento dañino, no es posible identificar el elemento de la imputación (fáctica y jurídica) que haga viable la declaratoria de responsabilidad reclamada.

En conclusión, ante la falta de prueba del evento, nos encontramos ante un escenario donde la parte actora, conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, no podrá obtener ningún efecto jurídico y deberán ser negadas las pretensiones.

3. AUSENCIA DE CAUSALIDAD FÍSICA IMPUTABLE AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI (AUSENCIA DE NEXO)

Además de que la parte actora no logró demostrar que la causa del daño fue la presunta caída del puente el día 01 de diciembre de 2019, de manera general y abstracta, tampoco logró señalar y probar que se hubiese presentado un evento en el mundo físico susceptible de ser resarcido y que este fuese imputable al Distrito Especial de Santiago de Cali.

Desde tiempo atrás, el Consejo de Estado – Sección Tercera², ha referido que la imputación no radica en las causas, sino en los hechos dañinos, de igual manera, ha indicado sobre el elemento de la imputación:

² Radicación No. 13.625 (1092) Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.

“La imputación es el elemento de la responsabilidad que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado, o desde otra perspectiva, un daño es imputable a un individuo cuando constituye la realización del riesgo que éste creó.”

Ahora, sobre si en un asunto opera o no un eximente de responsabilidad o una falta de vínculo causal, si bien desde el punto de vista teórico la diferencia entre ausencia de vínculo causal y ruptura, el mismo es considerable; al respecto, la alta corporación acotó:

*“La culpa exclusiva de la víctima como causa extraña tiene importancia siempre que se demuestre que el hecho fue causado físicamente por el demandado, pero que entre su actuar y el daño ha intervenido una acción ajena como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o de un tercero, que lo determinó a la realización del hecho. En otros términos, la causa extraña tiene importancia para afirmar que el daño fue causado físicamente, pero no jurídicamente por el demandado. **Pero, cuando no se acredita la causalidad física, no tiene sentido considerar si hubo o no ruptura del vínculo causal**”- Subrayado fuera del original.*

Así las cosas, y precisados los anteriores elementos que el mismo Consejo de Estado ha señalado con bastante anterioridad, es menester indicar que en el presente litigio **no se encuentra acreditada la causalidad física imputable al Distrito Especial de Santiago de Cali**, pues la parte actora ni siquiera acredita sumariamente la existencia del evento dañino reclamado.

Expresado en otras palabras, **sin un nexo causal que analizar**, es inane entrar a analizar si ocurrió una falla o no y si esta puede ser imputable a la administración municipal. Por lo que sin haber probado siquiera el evento dañino, deberán ser negadas las pretensiones de la demanda.

4. AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO COMO ELEMENTO ESENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD

Esta excepción se presenta sin aceptar responsabilidad alguna y sin comprometer la obligación indemnizatoria que eventualmente podría recaer en mi representada, así como reconociendo que no existe prueba sumaria que los presuntos perjuicios encuentren su génesis en el evento alegado e imputado al ente territorial.

Así las cosas, en primera medida, debe ponerse de presente ante el Despacho que el daño antijurídico alegado por el extremo demandante no tiene asidero fáctico, probatorio ni jurídico. El mismo se sostiene en las presuntas fracturas generadas en la humanidad del señor Ríos González y la afectación que sobrevino en su núcleo familiar, como consecuencia de las presuntas lesiones sufridas y que, según la gravedad de estas, además de las afectaciones de tipo mental o psicológicas, deben ser resarcidas conforme el tope máximo establecido por la jurisprudencia nacional (documento final del 28 de agosto de 2014 – Sección Tercera – Consejo de Estado).

Superado lo anterior, trayendo lo anterior al caso en concreto, demos ser enfáticos en que según el diagnóstico del señor Ríos González únicamente presentó “TRAUMATISMOS MÚLTIPLES NO ESPECIFICADOS”, siendo lo indicado en el resumen de la epicrisis lo que sigue:

<p>** REVALORACION DE PACIENTE **</p> <p>ANDERSON RIOS GONZALES EDAD 28 AÑOS C.C 1112472350</p> <p>IDX 1. TEC 2. TRAUMA FACIAL 3. TRAUMA EN REJA COSTAL DERECHA</p> <p>S: REFIERE MEJORIA DE DOLOR, LEVE DOLOR EN REJA COSTAL A LA INSPIRACION , NIEGA DIFICULTAD RESPIRATORIA O: EN CAMA, CONCIENTE, ORIENTADO SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA</p>
<p>Se resalta:</p> <p>“IDX 1.- TEC 2.-TRAUMA FACIAL 3.- TRAUMA EN REJA COSTAL DERECHA”</p>

Partiendo entonces que el extremo actor no señala o precisa en qué consistieron las lesiones sufridas, su dimensión e impacto en la humanidad del señor Ríos González, es viable concluir que el elemento daño antijurídico es inexistente en el presente litigio.

Y no existe daño, porque no hubo un menoscabo del interés jurídico tutelado, al respecto, el Consejo de Estado³, ha precisado:

“3.3.- En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

*3.4.- **El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado**, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”¹⁵.”* – Subrayado y negrilla fuera del original

Expresado de otra manera, no hay certeza ni claridad de las hipotéticas alteraciones sufridas por el señor Ríos González, pues como se ha venido señalando a lo largo del escrito, sin siquiera la prueba del evento dañino, no puede imputarse ningún menoscabo por mínimo que sea a la asegurada.

³ SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Rad. No.: 63001-23-31-000-2003-00463-01 (33948)

También, porque como se expresó líneas atrás el señor Ríos González mintió en su declaración al ser ingresado a la Clínica Colombia, tornándose, nuevamente un daño incierto, al respecto, el Consejo de Estado⁴, ha señalado:

*“41.- Ahora bien, los elementos constitutivos del daño son: i) la certeza del daño; ii) el carácter personal y; iii) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. **En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio**: “(...) tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, **es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia**”. – Subrayado y resaltado fuera del original*

En suma y para concluir, los perjuicios que el extremo actor dice haber sufrido no se encuentran soportados en ninguna prueba útil, conducente ni pertinente para tal efecto. La afectación que dicen padecer, no comporta las características de daño antijurídico, por lo que el mismo no es indemnizable; y sin este elemento axiológico de la responsabilidad no es posible que salgan adelante las pretensiones de la demanda.

5. INEXISTENCIA Y TASACIÓN EXCESIVA DE PERJUICIOS MORALES

De acuerdo al contenido de la demanda y los baremos establecidos en el documento final del 28 de agosto del 2014 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, es excesiva la solicitud de perjuicios morales que realizó la parte actora, quien solicitó lo siguiente:

Nombre	Vínculo	Valor
Anderson Ríos González	Afectado directa	100 SMLMV
Ángela María González Villegas	Madre	100 SMLMV
Lina Fernanda Ríos González	Hermano	50 SMLMV
Jefersson Ríos González	Hermano	50 SMLMV

Ahora bien, debe aclararse que la indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento para la presunta víctima. En otras palabras, es imperativo que el juez tenga en cuenta que los principios generales del derecho, la legislación y los criterios jurisprudenciales, establecen que la víctima de un hecho dañoso no puede enriquecerse como consecuencia de una indemnización. Por el contrario, la reparación únicamente debe propender por llevar a la persona al estado previo al acontecimiento del hecho.

⁴ C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección, C.P. Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Radicado No. 17001-2331-000- 2006-000586-01 (42.760), providencia del 09 de julio de 2018.

Por lo anterior y sin que signifique aceptación de responsabilidad alguna en cabeza de mi representada, en el evento que el honorable juez considere que sí se reúnen los elementos de la responsabilidad, comedidamente le solicito desestime la tasación exorbitante de perjuicios propuesta por la demandante.

Recuérdese entonces que el extremo actor no aportó ninguna prueba útil, conducente, pertinente, ni necesaria para demostrar el daño antijurídico que alega, pues éste solo se solicita de manera genérica sin ahondar en las cuestiones fácticas que eventualmente podrían dar luces sobre su causación.

Sumado a esto, si bien no existió prueba del evento dañino que se dice es el genitor del daño alegado, debemos ser enfáticos en señalar que tampoco hay prueba de las alteraciones que sobrevinieron a la parte actora, máxime cuando no hay un dictamen de pérdida de capacidad laboral que permita determinar si existió una lesión real y la envergadura o dimensión de esta, tampoco obra anotación médica o clínica con un diagnóstico que permita dar luces sobre el menoscabo señalado en la demanda.

Para concluir, el despacho no podrá tener en cuenta la errónea tasación de este perjuicio porque (i) no existe prueba sumaria de este y no es posible presumirlo; (ii) no hay elementos de convicción que permitan demostrar que el evento dañino alegado fue en efecto, la caída del puente y no el accidente automovilístico que se señaló en la atención médica; (iii) no existe dictamen de algún profesional en ciencias de medicina, medicina legal psicología o similares que permita dar cuenta de una lesión mental o corporal; y (iv) no existe un dictamen de pérdida de capacidad laboral que permita señalar la dimensión de la afectación y si esta existió.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

6. INEXISTENCIA Y TASACIÓN EXCESIVA DEL DAÑO A LA SALUD

La parte actora no aporta un dictamen o prueba documental que permita evidenciar de manera técnica o científica cuáles fueron las lesiones padecidas y cómo estas han afectado de manera grave y negativa que de manera puntual y específica han afectado su cotidianidad.

En el presente proceso, la parte demandante indicó que el señor Ríos González ha sufrido una serie de perjuicios a título de daño a la salud, por las presuntas lesiones ocasionadas al caer un puente peatonal en la ciudad de Cali y que estas han afectado de manera “mental o psicológico” al presunto lesionado.

Frente a dicho perjuicio, es necesario precisar que el mismo, se repara con base en dos componentes: (i) uno objetivo, el cual está determinado por el porcentaje de invalidez; y, (ii) uno subjetivo, que puede permitir incrementar o disminuir en determinada proporción el primer valor, conforme a las consecuencias particulares y específicas. Al respecto se ha establecido:

“[P]or lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible

tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

*De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.*⁵ – Subrayado fuera del original.

Adicionalmente, en el documento del 28 de agosto de 2014 de la Sala Plena de la Sección del Tercera del Consejo de Estado, existen unas variables que deberán ser tenidas en cuenta por el operador jurídico. Veamos:

“Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se considerarán las siguientes variables:

- *La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)*
- *La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.*
- *La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.*
- *La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.*
- *La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.*
- *Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.*
- *Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.*
- *Los factores sociales, culturales u ocupacionales.*
- *La edad.*
- *El sexo.*
- *Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.*
- *Las demás que se acrediten dentro del proceso.”*

Para concluir, teniendo en cuenta lo anterior y el papel totalmente pasivo del extremo actor, el despacho no podrá tener en cuenta la errónea tasación de este perjuicio porque (i) no existe prueba sumaria de este y no es posible presumirlo; (ii) no hay elementos de convicción que permitan demostrar que el evento dañino alegado fue en efecto, la caída del puente y no el accidente automovilístico que se señaló en la atención médica; (iii) no existe dictamen de algún

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 19031.

profesional en ciencias de medicina, medicina legal psicología o similares que permita dar cuenta de una lesión mental o corporal; y (iv) no existe un dictamen de pérdida de capacidad laboral que permita señalar la dimensión de la afectación y si esta existió.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

7. IMPROCEDENTE RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE

Los valores solicitados a título de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro no se encuentran soportados en ninguna prueba útil, conducente o pertinente, para que sean reconocidos.

Esto, por la sencilla razón que no se aporta prueba alguna que el señor Ríos González desempeñara actividad laboral alguna y porque no se configuran los presupuestos axiológicos de la responsabilidad del Estado, pues no se acredita el evento dañino ni el daño antijurídico; de otro lado, porque sin ese elemento esencial no es posible configurar el elemento de la imputación (fáctica y jurídica).

Descendiendo al caso en concreto, es necesario resaltar la definición que trae consigo el Código Civil colombiano respecto el lucro cesante y daño emergente:

“ARTICULO 1614. <DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE>. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”

Identificado este presupuesto normativo, debemos señalar que la pretensión “quinta” no señaló valor alguno. Ahora, es importante acotar que en el acápite “iv. Estimación razonada de la cuantía” se señaló el lucro cesante consolidado en la suma de \$33.755.818 y como lucro cesante futuro la suma de \$238.703.230. Finalmente, que debía restarse el 25 %, que se presume se invertía en gastos propios, entonces la suma es de \$179.027.422.

En contraste a lo solicitado, debemos manifestar que el extremo actor no aporta una prueba útil que permita inferir que el señor Ríos González realizara una actividad económica, bajo esa perspectiva resulta entonces abiertamente injustificado cualquier valor económico que se pretenda sea reconocido a favor del solicitante por el rubro aquí pretendido, siendo consecuencia directa de lo anterior, la imposibilidad de que prospere lo aquí solicitado.

Fundamento de lo anterior, el Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera – en Sentencia de Unificación con fecha del 18 de julio de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera (exp. 44572), precisó que en lo que atañe a la liquidación del lucro cesante futuro, **es preciso eliminar la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo**, en tanto contraría uno de los elementos fundamentales del daño, esto es, la certeza.

Lo anterior, en tanto que, para dicha corporación, se puede incurrir, al no dudar de su existencia, en el desatino de indemnizar un perjuicio inexistente, incierto o eventual. En este tenor lo señaló el fallo del consejo:

“1.1. Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante

2.1.2 Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno (artículos 177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.).

(...)

3.2.2 Ingreso base de liquidación

(...)

El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente acreditado y para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros contables que debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los ingresos percibidos por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes estén obligados a expedirlas, las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio siempre que satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, o que se haya allegado cualquier otra prueba idónea para acreditar tal ingreso.” (Subrayado del texto original)

Desde otra arista, como se ha venido desarrollando a lo largo del escrito si bien no existe prueba del evento dañino, mucho menos existe elemento útil que pudiera indicar o señalar que el señor Ríos González hubiese presentado lesión, padecimiento, enfermedad o afectación que se traduzca en una merma de la capacidad laboral de este, recuérdese que no se indicó en qué consistió la gravedad de afectación sufrida.

En consecuencia, a falta de prueba suficiente que permita demostrar la actividad laboral o alguna otra actividad productiva del señor Ríos González, y ante la falta de una prueba idónea que permita corroborar una afectación a su capacidad laboral, no podrán generarse pagos a cargo del demandado sobre supuestos fácticos que no han sido corroborados.

8.- IMPROCEDENTE RECONOCIMIENTO POR “DAÑO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS”

Dentro de las pretensiones no obra una solicitud expresa de reconocimiento a los “daños a los derechos constitucional y convencionalmente protegidos”; no obstante, en el acápite de estimación razonada de la cuantía, se argumentó lo siguiente:

“C. DAÑO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS.

*A causa de los hechos el señor **ANDERSON RIOS GONZALEZ**, se ha visto afectado considerablemente su vida, dado que producto de la afección padecida ya no volvió a relacionarse con su grupo familiar, amigos y entorno, de la manera como lo hacían antes. Por lo expuesto debe reconocerse al señor **ANDERSON RIOS GONZALEZ** el equivalente a 100 S.M.M.L.V. por concepto de daño a la vida en relación, a cada uno.”*

Es claro entonces que el extremo actor confunde el “DAÑO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS”, con el concepto de daño a la vida en relación. Además, que previamente solicitó como daño a la salud un valor al señor RÍOS GONZÁLEZ.

Superado esto, también se presenta oposición, en el sentido que no se encuentran acreditados ninguno de los elementos constitutivos de responsabilidad estatal. Tampoco se encuentra prueba sumaria del daño antijurídico que pretende ser resarcido.

Finalmente, debe señalarse que si bien no obra una pretensión puntual de reconocimiento a esta tipología de perjuicio, la simple mención en el acápite respectivo, implica una oposición de esta parte, para lo cual debe sintetizarse todo lo discurrido y aunado a esto, señalar que para resarcir esta tipología, se privilegian medidas no pecuniarias.

De nuevo, se resalta que no podrán generarse pagos o indemnizaciones a cargo del demandado sobre supuestos fácticos que no han sido corroborados.

9. AUSENCIA DE VOCACIÓN PROBATORIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL – FOTOGRAFÍAS

El extremo actor aporta una serie de fotografías para demostrar algunos de sus hechos; sin embargo, dichas fotografías no le permiten al operador jurídico dar por probados los hechos en tanto no sea posible acreditar su origen, autoría y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron tomadas. Para dar sustento a este argumento, en sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle, calendada 21 de abril de 2018⁶ se hizo referencia a lo siguiente:

“LAS FOTOGRAFÍAS COMO MEDIO DE PRUEBA

La Sección Tercera del H. Consejo de Estado, frente a este tema ha fijado una línea jurisprudencial pacífica que orienta que las fotografías son en efecto medios de prueba idóneos para probar los hechos en que se funda la demanda siempre que de aquellas sea posible acreditar su origen, su autoría y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las mismas fueron tomadas pues en su defecto carecen de valor para que el juez pueda fundar su decisión en aquellas” – Subrayado y énfasis propio.

⁶ Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con fecha del 21 de abril de 2018, dentro del medio de control de reparación directa, radicado 76-001-33-33-009-2014-00052-01, promovido por la señora LUZ MARINA SOLARTE OCAMPO en contra del Municipio de Jamundí Valle, Magistrada Ponente: Dra. Zoranny Castillo Otálora.

A partir de la introducción reseñada, el Consejo de Estado - Sección Tercera⁷, ha mencionado enfáticamente que estas deben cumplir con los requisitos formales de autenticidad y certeza de lo que representan:

“FOTOGRAFÍA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA

*[L]a Sala considera pertinente aclarar que, si bien los demandantes allegaron al expediente unas fotografías, estas no tienen merito probatorio al no existir certeza de la persona que las realizó, ni si el lugar corresponde al mismo en el que murió el señor [...] y tampoco fueron ratificadas o reconocidas en el trámite del proceso, por lo que solo son prueba de que se registró una imagen. Lo anterior no desconoce que las fotografías son un medio de prueba documental que el juez está en la obligación de valorar de acuerdo con la sana crítica; **sin embargo, para ser tenidas en cuenta por el operador judicial, deben cumplir con los requisitos formales, la autenticidad y la certeza de lo que representan**” – Subrayado y énfasis propio.*

Desde otra arista, pero con similar conclusión sobre el valor probatorio de las fotografías, dicha Sección también ha referido:

ii) El valor probatorio de las fotografías y los hechos que con ellas se documentan. *El material fotográfico, como medio de prueba, se enlista dentro de las denominadas documentales y, en tanto documento, reviste de un “carácter representativo, que muestra un hecho distinto a él mismo”. De ahí que, “[l]as fotografías por sí solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden probarse”, con lo cual, el valor probatorio que puedan tener “no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición”.⁸*

En conclusión, para el Juzgador, es necesario que las fotografías que aporte el extremo actor puedan brindar certeza de la persona quien las tomó, del sitio donde fueron tomadas y de las condiciones en que estas fueron obtenidas; sin embargo, en el caso bajo estudio no permiten dar cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que estas fueron tomadas, incumpliendo así los parámetros o directrices esbozadas por la jurisprudencia. Lo expuesto, deviene en que carecen de valor probatorio.

Se reitera pues, que el extremo actor, tampoco logra soportar sus dichos a partir de las pruebas que aporta como fotografías, por las mismas, no cuentan con la vocación probatoria de probar sus peticiones.

10. GENÉRICA O INOMINADA

⁷ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020). Radicación número: 76001-23-31-000-2010-00824-01(54724) Actor: LINA MARCELA ROMERO CANO Y OTROS Demandado: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI ESP.

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. (14 de febrero de 2018) Expediente 44494. [C.P. Ramiro Pazos Guerrero].

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, y por deducción jurídica de mí prohijada, que pueda configurar otra causal que las exima de toda obligación indemnizatoria.

Lo anterior, en concordancia de lo señalado en el artículo 282 del Código general del Proceso:

“ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.”

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción se Debra de manera oficiosa reconocerla en sentencia.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

PARTE II

CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A “HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA EL LLAMAMIENTO”

Frente al hecho primero: Es cierto, en el entendido que se trata de la identificación del proceso en cuestión, el radicado, los demandantes y el demandado. En todo caso, **no es una situación fáctica** que atañe a la relación contractual entre la aseguradora que represento y el llamante en garantía.

Frente al hecho segundo: Es cierto, en el entendido que se trata de una síntesis del proceso y las pretensiones que de él derivan. En todo caso, **no es una situación fáctica** que atañe a la relación contractual entre la aseguradora que represento y el llamante en garantía.

Frente al hecho tercero: Dado que el hecho contiene varias afirmaciones se contestarán de la siguiente manera:

Es cierta la existencia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420 80-994000000109, expedida el 10-05-2019, donde aparece como tomador y asegurado el Distrito Especial de Santiago de Cali, dicha póliza, pactada bajo la modalidad de ocurrencia tiene una vigencia del 29-05-2019 al 23-04-2020.

Se resalta que la misma fue expedida bajo la modalidad de coaseguro con las siguientes compañías aseguradoras y en el porcentaje estipulado (compañías que fueron vinculadas por la entidad territorial):

- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA (35 %)
- **CHUBB SEGUROS COLOMBIA (30 %)**
- SBS SEGUROS COLOMBIA (25 %)
- HDI SEGUROS (10 %)

La cobertura que esta ofrece, no opera de forma automática, pues la misma depende de las condiciones particulares y generales que rigen la relación contractual objeto de la convocatoria. No obstante, la responsabilidad que pretendió predicar la parte demandante hacia esta entidad distrital, es inexistente y al no configurarse los presupuestos de responsabilidad como se ha fundamentado a lo largo de este escrito, no se realizó el riesgo asegurado y por consiguiente hay una inexistencia de cobertura.

En todo caso, en el eventual evento de ser necesario el análisis de la relación sustancial entre el llamante en garantía y mi representada, deberán tenerse en cuenta todas las estipulaciones realizadas en el contrato de seguro, así como el clausulado particular y general que delimita el amparo, límites, exclusiones, coaseguro, deducible, y demás previsiones a tenerse en cuenta.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES TÁCITAS DEL LLAMAMIENTO

Al momento de resolver lo concerniente a la relación sustancial que sirve de base a la convocatoria que se hizo a mi procurada como llamada en garantía por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, ruego tener en cuenta, pese a la ausencia de responsabilidad de dicha entidad y de mi procurada en torno a los hechos en que se basa la demanda, que en el remoto caso que prosperaren una o algunas de las pretensiones del libelo de la parte actora, en gracia de discusión y sin que esta observación constituya aceptación de responsabilidad alguna, mi representada se opone a la prosperidad de las pretensiones del llamamiento en garantía en la medida que excedan los límites y coberturas acordadas, y/o desconozcan las condiciones particulares y generales de la póliza y las disposiciones que rigen el contrato de seguro, así como también, si exceden el ámbito amparado otorgado o no se demuestra la realización del riesgo asegurado o se comprueba una causa de exclusión.

Igualmente, me opongo correspondiente indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales por parte de mi representada por cuanto no se configura la declaración de responsabilidad que pretende la parte demandante frente al Distrito Especial de Santiago de Cali.

Lo anterior debido a que como se acredita con la sustracción fáctica de la demanda, no se identifica cuál es la conducta de la mencionada entidad que haya causado los hechos enunciados en la demanda pues no hay prueba de que esa situación haya obedecido a una falla del servicio de la administración Municipal en comento, mucho menos que el evento dañino se generado en los términos que fueron señalados por el grupo actor.

EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA HDI SEGUROS S.A., POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO A TRAVÉS DE LA PÓLIZA No. 420-80-994000000109, VIGENTE DEL 29-05-2019 AL 23-04-2020

No existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado en la Póliza No. 420-80-994000000109, vigente del 29-05-2019 al 23-04-2020. En el plenario no está demostrada la responsabilidad que el extremo activo pretende endilgar, en la medida que no confluyen las pruebas útiles, pertinentes, necesarias y conducentes que demuestren que en efecto se generó un evento dañino, imputable al ente territorial y las consecuencias de éste en la humanidad del señor Ríos González y que haya tenido la virtualidad necesaria para afectar a los demás demandantes.

En su lugar, de las pruebas aportadas por el extremo actor, no se vislumbra que haya existido evento alguno que haya lesionado al demandante. Sumado a esto, la aparente lesión médica que él dice haber sufrido, se ocasionó por un presunto accidente automovilístico, según las notas de atención médica, versión que fue distorsionada para obtener un beneficio.

En este orden de ideas, en concordancia con todo lo referenciado a lo largo del presente escrito, se propone esta excepción toda vez que **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, no está obligada a responder, de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en el contrato de seguro.

Expresado en otras palabras, la responsabilidad de mi representada está supeditada al contenido de la póliza, sus diversas condiciones, al ámbito de amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, a los riesgos asumidos por la convocada, a los valores asegurados para cada amparo, al deducible pactado etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial que sirve de base para el llamamiento en garantía, al contenido del contexto de la correspondiente póliza.

Al tenor de lo expuesto, el objeto del seguro en mención fue el siguiente:

“Objeto del Seguro

Amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades.” Subrayado fuera del original.

En efecto, al no darse los elementos que permitan declarar la responsabilidad del asegurado, no hay fundamento para afectar la póliza en comento por ausencia de realización del riesgo asegurado, es decir que en el presente asunto no se ha estructurado un siniestro, lo que deviene en que no se cumple la condición esencial para que surja la obligación contractual de resarcir a cargo de mi procurada.

Por los motivos expuestos, le solicito respetuosamente al Juzgado que niegue las pretensiones del llamamiento en garantía y de esta forma libere a **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, de toda responsabilidad.

2. EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA No. 420-80-994000000109, VIGENTE DEL 29-05-2019 AL 23-04-2020.

En la Póliza No. 420-80-994000000109, vigente del 29-05-2019 al 23-04-2020, se pactaron unas exclusiones, que de llegarse a configurar, la consecuencia jurídica que deviene es que se exime al asegurador de asumir la obligación indemnizatoria, pues el evento no se encuentra amparado por el contrato de seguro.

En dicha materia, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del Contrato de Seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza.

En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020⁹, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro” – Subrayado fuera del original.

En consideración a lo expuesto, tendiendo en cuenta las exclusiones pactadas, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, solicitamos que de llegarse a configurar alguna de las exclusiones convenidas en las condiciones particulares y generales de la póliza, estas se apliquen y en tal medida se determine que mi representada no será responsable de pagar daños y/o costos originados en tales reclamaciones.

3. EMINENTE CARÁCTER INDEMNIZATORIO QUE REVISTE EL CONTRATO DE SEGURO CONVENIDO EN LA PÓLIZA LA PÓLIZA No. 420-80-994000000109, VIGENTE DEL 29-05-2019 AL 23-04-2020.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el

⁹ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020.

patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo.

De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización.

Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece al respecto:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, es imposible imponer una condena y ordenar el resarcimiento de un detrimento por perjuicios no demostrados o presuntos, o si se carece de la comprobación de su magnitud y realización. Lo anterior, ya que no es admisible la presunción en esa materia. De manera que una indemnización sin fundamentos fácticos ni jurídicos necesariamente se traduciría en un lucro indebido, situación que se configuraría en el evento en el que se concedan las pretensiones de la demanda.

Acorde con lo precisado, huelga recordar que las solicitudes resarcitorias solicitadas en la demanda son totalmente improcedentes. De un lado porque la parte demandante no sólo no prueba la causación del perjuicio moral que aduce, sino porque no hay prueba alguna de las presuntas lesiones sufridas y padecidas, pues no se aportó dictamen médico legal que constara lesiones, incapacidades, como tampoco un dictamen de pérdida de capacidad laboral que permitiera calificar de forma más o menos objetiva las presuntas lesiones padecidas.

Respecto el daño patrimonial, este no se encuentra soportado y no comporta las características para ser resarcido, pues no se encuentra cuantificado y no ostenta el carácter de cierto, siendo este meramente hipotético que parte de supuestos no realizados, pues, de un lado, no se aporta prueba que el señor Ríos González realizara actividad lucrativa alguna, mucho menos que hubiese sufrido una lesión que se traduzca en una pérdida de capacidad laboral del demandante.

Finalmente, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por ello y teniendo en cuenta que la parte Demandante deprecia en el escrito de demanda sumas de dinero por conceptos de perjuicios totalmente elevadas y exorbitantes sin prueba alguna, además de no estar demostradas, es que lo dicho anteriormente debe ser aplicado al caso en concreto. Así las cosas, no puede romperse el principio indemnizatorio que solo se repara el daño, solamente el daño y nada más que el daño

4. EXISTENCIA DE COASEGURO, QUE NO IMPLICA SOLIDARIDAD ENTRE LAS PARTES, POR LO QUE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA SE LIMITA AL

**PORCENTAJE PACTADO Y CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. 420-80-994000000109,
VIGENTE DEL 29-05-2019 AL 23-04-2020.**

Sin perjuicio de los argumentos arriba expuestos, debe manifestarse al Despacho, que solo si en gracia de discusión, hipotéticamente naciera obligación de mi procurada, la misma deberá estar sujeta a todas y cada una de las condiciones estipuladas en las Pólizas que se discuten. Puntualmente, ruego tener presente que dichos contratos fueron suscritos en coaseguro por **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. y HDI SEGUROS S.A.**, cuya distribución corresponde a la siguiente:

COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
CHUBB SEGUROS COLOMBIA	30.00	
SBS	25.00	
HDI SEGUROS	10.00	

Expresada la misma información, de manera más gráfica, tenemos:

COMPañÍA	PORCENTAJE	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Líder	35 %
COASEGURO CEDIDO		
CHUBB SEGUROS COLOMBIA		30 %
SBS SEGUROS		25 %
HDI SEGUROS		10 %

En ese sentido, existiendo un coaseguro, es decir, estando distribuido el riesgo entre mi representada y las compañías de seguro mencionadas, la responsabilidad de cada una de las coaseguradoras está limitada al porcentaje antes señalado, pues de ninguna manera puede predicarse una solidaridad entre ellas. Al respecto el artículo 1092 del Código de Comercio, estipula lo siguiente:

“En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad. (Subrayado fuera de texto).”

Lo consignado en la norma en cita se aplica al coaseguro, por estipulación expresa del artículo 1095 del estatuto mercantil, el cual que establece:

“Las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro.” (Subrayado fuera de texto).

Sobre este punto, ha mencionado el Consejo de Estado¹⁰ de manera reciente:

*<<Precisa la Sala que no se está en presencia de dos contratos de seguro distintos sobre un mismo riesgo sino de uno solo, **en el que las dos compañías aseguradoras mencionadas distribuyeron entre ellas la asunción de dicho riesgo en determinadas proporciones según lo autoriza el artículo 1095 del Código de Comercio**, con fundamento en el cual la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado su alcance así¹¹:*

“El contrato de coaseguro es un contrato plurilateral en el que, en un mismo instrumento, dos o más sujetos aseguradores asumen de manera conjunta la responsabilidad de un riesgo asegurable hasta por la totalidad de éste y que puede surgir por iniciativa del asegurado o por el ánimo de uno los aseguradores, esto último siempre con la aquiescencia del interesado, como bien lo señala el artículo 1095 del Código de Comercio, según el cual:

‘(...) en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro’.>>
(Negrilla y resaltado fuera del texto original. Negrilla del texto original)

En conclusión, existiendo coaseguro, de acuerdo con el cual cada aseguradora asumió el porcentaje arriba señalado, se destaca que ni siquiera en el improbable caso de que fueran viables las pretensiones de la parte actora, podría condenarse a mi representada por lo que le corresponde a las otras coaseguradoras. Lo anterior, como quiera que en el coaseguro las compañías aseguradoras no son solidarias, como se desprende del artículo 1092 del Código de Comercio, debido a que cada asegurador deberá soportar la indemnización debida, en proporción a la cuantía de su participación porcentual. **Así las cosas, solicito se tenga en cuenta el porcentaje asumido por mi representada.**

5. LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD EN LA PÓLIZA No. 420-80-994000000109, VIGENTE DEL 29-05-2019 AL 23-04-2020.

Sin perjuicio de lo anterior, y sin que se entienda comprometida mi representada, es necesario manifestar al Despacho, que bajo la hipótesis en que naciera obligación de la ASEGURADORA, la misma se sujetará a lo consignado al tenor literal de la póliza, y por tanto, a las condiciones particulares de la misma, entre ellas, a la suma asegurada, el coaseguro pactado, el deducible y las exclusiones que se hayan pactado.

Al respecto, dispone el artículo 1079 del Código de Comercio que “*El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada (...)*”; por lo que, en el

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia 26-01-2022. M.P. Fredy Ibarra Martínez.

¹¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020, exp. 49.612, CP José Roberto Sáchica Méndez.

evento de proferirse una condena a mi representada, ésta se verá condicionada a los valores asegurados en el contrato, a los deducibles pactados en el mismo en caso de existir, y de acuerdo con el porcentaje de coaseguro que le corresponde (el 30 % correspondiente).

Así entonces, de acuerdo con los artículos 1079 y 1089¹² del Código de Comercio, la responsabilidad máxima del asegurador se limita a la suma asegurada, de manera que ese es el tope de la responsabilidad asumida por la aseguradora, siempre y cuando se compruebe primero que se cumplió la condición de la que nació su obligación de indemnizar y evidentemente, el daño y la cuantía de este.

Para determinar el monto asegurado, debemos sujetarnos a lo dispuesto por <interés asegurado> en las Condiciones Generales de la Póliza – Responsabilidad Civil Extracontractual:

“INTERÉS ASEGURADO.

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES (DAÑO MORAL Y PERJUICIO FISIOLÓGICO), DE ACUERDO CON LOS SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE Y/O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO AMPARADO EN LA PÓLIZA.” – Subrayado fuera del original.

Así, al revisar el tope máximo pactado en el contrato de seguro, se observa el siguiente:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
PATRIMONIO DEL ASEGURADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 7,000,000,000.00		
BENEFICIARIOS	NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS	7,000,000,000.00		

En conclusión, en caso de condena desfavorable a los intereses de mi procurada, deberá tenerse en cuenta la disponibilidad del valor asegurado, el límite del valor asegurado, el porcentaje de participación en la asunción del riesgo que aceptó mi representada, y finalmente las exclusiones pactadas.

6. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los

¹² <LÍMITE MÁXIMO DE LA INDEMNIZACIÓN>. Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario.

Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, mas no que es inferior a él.

sinistros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

7. GENÉRICA O INOMINADA

Solicito señor Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el decurso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de prescripción del contrato de seguro

Lo anterior, en concordancia de lo señalado en el artículo 282 del Código general del Proceso:

“ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.”

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción se deberá de manera oficiosa reconocerla en sentencia.

V. PRUEBAS

SOLICITADAS POR ESTA PARTE:

a. DOCUMENTALES

Solicito se tengan como tales las siguientes:

1. Póliza Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000109 (anexo 0) vigente del 29-05-2019 (23:59 horas) al 23-04-2020 (23:59 horas). Expedida el 10-05-2019 por Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.
2. Condiciones Generales de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual Condiciones Generales de la Póliza contenidas en la proforma 16/03/2018-1502-P-06-GENER-CL-SUSG-04-DROI.
3. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Chubb Seguros Colombia S.A.
4. Escritura pública No 1599 de la Notaría 28 de Bogotá del 24 de noviembre de 2016, donde consta el poder general otorgado.

b. INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas o la oportunidad procesal correspondiente a los demandantes, señores:

Nombre	Vínculo
Anderson Ríos González	Afectado directo
Ángela María González Villegas	Madre
Lina Fernanda Ríos González	Hermano
Jefersson Ríos González	Hermano

Lo anterior con la intención de responder a las preguntas que formularé en sobre cerrado o verbalmente en la misma diligencia, correspondiente a la aclaración de las situaciones de hecho que motivó la presente demanda, los cuales podrán ser citados en la dirección y/o correo que señaló el apoderado judicial de los mismos.

c. TESTIMONIAL

Me permito respetuosamente solicitar intervenir en la declaración que realicen los testigos solicitados por las partes en la oportunidad dispuesta para su declaración.

OPOSICIÓN A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR EL EXTREMO DEMANDANTE

- El extremo actor aportó un conjunto de pruebas documentales (fotografías) por lo que sin perjuicio de la ausencia de responsabilidad que le asiste al extremo pasivo, y por contera a mi representada, manifiesto respetuosamente al Despacho que, en atención al debido proceso, me opongo a que se tengan como prueba las fotografías aportadas, toda vez que: (i) no es posible determinar la fecha real en la que se capturaron las mismas. (ii) No es posible establecer si la imagen representa los hechos que se le atribuyen. Ahora, dado que mi mandante no participó en la toma de las mismas, se desconocen con base al artículo 272 del C.G.P.
- Se solicitaron una serie de pruebas <documentales por solicitar>; sin embargo, el extremo actor no aporta prueba de haberlas solicitado antes por medio de Derecho de Petición a la autoridad o entidad destinataria. Así las cosas, ante la falta de este elemento previo, solicito no se decreten las mismas.
- En el remoto e hipotético caso que se oficie a la Junta Regional de Calificación para que determine la pérdida de capacidad laboral del señor Anderson Ríos González, y se elabore dictamen pericial con dicha finalidad, solicito que comparezca el médico ponente del dictamen para efectos de contradicción de la prueba.

VI. ANEXOS

1. Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia donde consta que el doctor JUAN RODRIGO OSPINA LONDOÑO tiene la representación legal de la HDI SEGUROS S.A.
2. Poder especial para actuar como apoderado judicial

VII. NOTIFICACIONES

El suscrito en la Avenida 6A Bis N° 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212, de la ciudad de Cali, o en la Secretaría de su Despacho. Dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No.19.395.114 de Bogotá
T. P. No. 39.116 del C.S. J.